

El drama del paro

Enric Sanchis

*Con ser de antiguo tan grave y tan extendida la plaga del paro forzoso,
pocas son las iniciativas que para remediar sus efectos
se han producido en España*

[F. G. R. y R. O., 1914]

Drama, sí, aunque quizá sea más adecuado definirlo como tragedia. Porque el drama puede resolverse satisfactoriamente, mientras la tragedia suele acabar mal, no tiene solución. Así lo parece en el caso de España, porque se ha convertido en un rasgo estructural de nuestra sociedad y por la incompetencia que ha demostrado la política económica (socialista o popular) para enfrentarlo.

Como dicen los historiadores, lo que dura es estructura, lo demás coyuntura; y aquí llevamos al menos medio siglo contemporizando con el paro. Ni siquiera durante la etapa del desarrollismo franquista, cuando crecíamos al doble que Europa, tuvimos pleno empleo. Aquí hubo otra cosa que solo tímidamente se manifestó como paro explícito. Por eso pasó desapercibido. Había, primero, millones de subempleados viviendo malamente en la agricultura; segundo, otros tantos de amas de casa sin acceso al trabajo remunerado; y tercero, un *stock* permanente de unos dos millones de emigrantes que tuvieron que ir a buscarse la vida a otra parte. Ni para unos ni para otras había sitio en aquellos islotes de economía urbana moderna que comenzaron a crecer al albur del Plan de Estabilización de 1959, cuando nuestros sectores productivos reconectaron con el exterior pero al amparo de un marco regulador fuertemente proteccionista.

¿Incompetencia de la política económica socialista, popular y, por supuesto, franquista? En este caso el término es sin duda inadecuado. Incompetente o ineficaz es quien pretendiendo alcanzar un objetivo no lo consigue, y aquí nunca se ha pretendido el pleno empleo. Desde 1959 la prioridad de la política económica ha sido engancharnos a Europa para disfrutar de su bienestar [J. Estefanía, 2007]. El problema del desempleo se resolvería después, por añadidura, tras recorrer los distintos eslabones de una larga cadena causal. Más que de incompetencia hablemos, pues, de indiferencia, dejación, desentendimiento de la política económica ante el problema.

Supuesta tragedia o drama, el paro no debería provocar resignación –que está bien para las catástrofes naturales– sino indignación. Porque desde que la cultura occidental pasó por el filtro de la Ilustración sabemos que los problemas sociales (y el paro lo es) son consecuencia de la propia organización de la sociedad y, en definitiva, de la conducta de quienes la constituyen. Y si somos nosotros quienes los hemos provocado, nosotros somos quienes debemos resolverlos. Ahora bien, la indignación no es el mejor estado de ánimo para enfrentar un problema complejo. El científico necesita espíritu templado y datos asépticos en que fundamentar su diagnóstico. Pero como aquí no quiero dirigirme solo al especialista sino también al ciudadano, desarrollaré mi reflexión por la vía del ensayo, un género que no soporta mal la indignación.

UN PROBLEMA ESTRUCTURAL

Vale decir una especie de hecho social durkheimiano, de esos que caen como una losa sobre una generación que no puede hacer nada por evitarlo. En el bien entendido de que esa losa la hemos fabricado nosotros mismos, esto es, las generaciones que nos precedieron, cuyas acciones cristalizaron en elementos de la estructura social que se proyectan hacia el futuro y no pueden ser modificados a corto plazo.

El de 2012 ha sido de nuevo el año del paro. El impacto de la gran crisis actual sobre la economía española es demoledor. Antes de la catástrofe (en 2006) el paro llegó a situarse por debajo de los dos millones de efectivos y en tasa apenas superaba el 9% de la población activa, aproximadamente la media europea. Hoy (III trimestre de 2012, *Encuesta de Población Activa*, EPA, últimos datos disponibles cuando se escribe) tenemos 5.778.100 parados, el 25,02% de la población activa. Y no se olvide que estos parados son solo las personas estadísticamente consideradas como tales según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo. Una redefinición moderada y sociológicamente razonada del paro bastante congruente con lo que en el imaginario colectivo se entiende por «parado» daría como resultado cifras muy superiores. Por ejemplo, frente a la estimación de 5.273.600 parados en el IV trimestre de 2011, puede defenderse que en realidad había 6.082.174 personas en esta situación, 808.574 desempleados más, lo que equivale al 15,33% del paro estimado por la EPA [E. Sanchis y otros, 2012]. Aplicando esta proporción al III trimestre de 2012, en tal fecha el paro se habría situado en 6.663.883 efectivos. En todo caso, la sociedad española puede estar bien segura de que la EPA no estima más, sino menos, parados de «los que hay». Y al paso que vamos es de temer que cuando se lean estas líneas tengamos ya siete millones de «parados de verdad».

Pero no nos engañemos: la situación no es ni mucho menos excepcional. Aquí hemos sido siempre campeones del paro, los primeros de Europa y dupli-

cando la media europea muchas veces. Excepcional fue el largo periodo de crecimiento del empleo anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria y de la economía financiera desregulada y corrupta en Estados Unidos en 2007. Desde 1976 lo normal ha sido un nivel de paro cercano al 20% de la población activa. Y no olvidemos que las estadísticas franquistas fotografiaban muy mal el desempleo.

El paro se desbordó a partir de la muerte de Franco porque:

1. La agricultura seguía expulsando fuerza de trabajo excedentaria –el empleo agrícola se ha reducido a mucho menos de la mitad desde entonces.
2. La industria ya no podía acoger ese excedente, pues estaba en retroceso en todas las economías avanzadas y devolviendo emigrantes a sus países de origen. En nuestro caso con más razón, a medida que el proteccionismo llegaba a su fin, el bajo coste del trabajo iba dejando de ser nuestra principal ventaja comparativa y la inversión en I+D+i no tomaba el relevo.
3. Los servicios nunca se desarrollaron suficientemente, en particular los vinculados a la ampliación del concepto de ciudadanía y la construcción del Estado de bienestar. Así lo demuestra el raquítrico peso del empleo público sobre el empleo total, similar al de Estados Unidos y muy por debajo del que tiene en la Europa del capitalismo social. Un breve paseo por Eurostat muestra sin lugar a dudas que no es cierto que en España tengamos mucho empleo público. Equivale al 12% de la población activa. Ni siquiera Irlanda (con un 18%) tiene tan pocos empleados públicos. En relación a la población adulta, en 2008 teníamos un 9% de empleados públicos frente al 15% de la UE-15. Hoy tenemos muchos menos.
4. Los efectos retardados del *baby boom* de los años sesenta, combinados con la llegada a la edad de jubilación de una generación diezmada por la guerra y la emigración, contribuyeron a alimentar el paro juvenil.
5. El aumento de la oferta de trabajo femenino. Un cambio cultural acelerado, impulsado por nuevas generaciones de mujeres más educadas que sus coetáneos varones, ha acabado convirtiendo la familia simétrica en términos de género en el modelo ideal preferente, como demuestran unas tasas de actividad femenina crecientes cada vez menos sensibles a las oscilaciones del empleo.

Reflejando los avatares del ciclo económico internacional, el paro español ha subido y bajado alternativamente a lo largo del tiempo, pero siempre con mucha más intensidad que en Europa y en el marco de un modelo de crecimiento económico tradicionalmente incapaz de movilizar fuerza de trabajo hasta niveles próximos al pleno empleo. Lo excepcional –como se decía– es lo ocurrido entre 1994 y 2007. Una situación internacional muy favorable y factores internos, entre otros el cambio en la legislación urbanística promovido por el Gobierno del PP en 1998, generaron una espiral especulativa inmobiliaria y financiera que

se tradujo en millones de nuevos empleos y obligó a importar por primera vez en la historia a millones de inmigrantes; aunque no pudo acabar con el desempleo autóctono, lo que se ha dado en llamar el paro paradójico. No faltaron voces advirtiendo que aquello no podía durar, que estábamos levantando una *falla* condenada a ser pasto de las llamas. El tiempo ha dado la razón a aquellos agoreros, pero entonces nadie les hizo caso, comenzando por una clase política irresponsable.

En resumen, hechos estructurales de mucho peso explican en gran medida la tragedia del paro. Entre ellos no debe minusvalorarse la herencia de un pasado que se remonta cuando menos a los años oscuros del franquismo. Es el caso de la desidia histórica con que este país ha tratado a su sistema educativo. No es la panacea, pero un comportamiento más ilustrado con la educación hubiese contribuido a plantear el problema en términos menos dramáticos. Desde que vivimos en democracia con la educación ha pasado lo mismo que con el paro. Prioritaria en la retórica política, nunca lo fue en los Presupuestos generales del Estado. Reconozcamos no obstante que los Gobiernos socialistas siempre la trataron con más cariño que los populares, pero solo después de atender «otras cuestiones más importantes», como las autovías o el ferrocarril de alta velocidad.

LA RESPONSABILIDAD DE LA CLASE POLÍTICA

No me gusta utilizar este término –propio de la sociología de las elites– porque da a entender que todos los políticos son iguales, lo que no es cierto. Ahí el que ha dado en llamarse movimiento de los indignados se equivoca, y si no son capaces de distinguir entre unos y otros acabarán aislándose en un radicalismo inoperante de mucho ruido y pocas nueces y convirtiendo en adversarios a quienes solo pueden ser sus aliados naturales.

Los políticos no son todos iguales. La mayoría son honrados, algunos incluso competentes, y muchos están en política porque creen en la cosa pública. Sin embargo, por lo que hace al paro (obviamente no en lo que se refiere a otras cuestiones) sí puede hablarse de clase política en conjunto, en el sentido de que todos han actuado de forma parecida. Lo que quiero decir es que la política económica desarrollada por unos y otros cuando han estado en el Gobierno siempre ha tenido otro objetivo más importante, ya sea contener la inflación, prepararnos para entrar en la UE, en el euro o conseguir el equilibrio presupuestario.

Así que el paro ha acabado siendo el inevitable efecto secundario de *la única política económica posible*, de manera que si un ciudadano poco avisado comienza a documentarse sobre el tema puede acabar concluyendo que más vale no acercarnos demasiado al pleno empleo. La política económica efectivamente aplicada por todos los Gobiernos ha sido dictada en gran medida por el pensamiento ortodoxo que domina en el Banco de España, según el cual el paro no es sino la

consecuencia lógica del mal funcionamiento de un mercado de trabajo demasiado rígido.

Esta pintoresca interpretación tiene su fundamento doctrinal en el paradigma neoclásico, que a finales del siglo XIX corta la conexión de la corriente principal de la economía académica con el resto de las ciencias sociales para acabar convirtiéndola en un *divertimento* de las matemáticas. En el mismo momento en que Beveridge [K. Williams y J. Williams, 1990] descubre el desempleo *involuntario* (un problema de la industria, que no han provocado los trabajadores), aquellos economistas se inventaron el paro *voluntario*: la consecuencia de la acción colectiva irracional del movimiento obrero. Con sus organizaciones sindicales por fin legalizadas y su presión para que los Parlamentos comenzaran a producir normas laborales respetuosas con la dignidad del trabajador, habrían impedido que la conducta racional individual del *homo economicus* determinara, en el mercado libre, los salarios y condiciones de trabajo de equilibrio, aquellos que garantizaban el pleno empleo.

Ni siquiera en España dejaron de escucharse voces tempranas cuestionando tal despropósito: «Los economistas liberales, inspirados en los principios de un individualismo ya en descrédito, proclamaban en teoría, sin perjuicio de contrariar sus predicaciones en la práctica, que solo la libertad y la libre concurrencia y la práctica de la ley de la oferta y la demanda y del cada vez más desacreditado principio *laissez faire, laissez passer*, podían remediar todos los males presentes» [F. González Rojas y R. Oyuelos, 1914]. Si a pesar de ello, de atentar contra el sentido común y de más de un siglo de evidencia en contra, el diagnóstico neoclásico ha resistido incólume el paso del tiempo, es porque muchos economistas académicos lo defienden con entusiasmo. Unos cuantos de ellos cobijados en FEDEA (fundación muy bien patrocinada por la banca y otras grandes empresas españolas), llevan ya varios años machacando a la opinión pública con sus propuestas para la reactivación laboral. En esencia son dos. Primera, acabar con la dualidad *insiders/outsiders* mediante un contrato único que convertiría a todos los ocupados en precarios. Segunda, acabar con la negociación colectiva sustituyéndola por el pacto a nivel de empresa (propuesta asumida por el Gobierno del PP en su reforma laboral de 2012). Dicho en otras palabras, dejar que quien tiene la sartén por el mango imponga los salarios y demás condiciones que equilibren oferta y demanda de trabajo y así el paro caerá hasta un nivel friccional mínimo.

Desarrollando sus juegos matemáticos, estos economistas podrían acabar explicándonos cuál sería el salario *negativo* de equilibrio. Digo bien: cuánto tendrían que *pagar* por trabajar nuestros muchos millones de parados para que se alcanzase el pleno empleo. Todo se andará. De momento el hecho cierto es que desde hace treinta años el mercado de trabajo ha conocido ya unos cincuenta retoques y reformas [Fundación 1º de Mayo, 2012], no ha dejado de flexibilizarse, pero al parecer todavía no lo suficiente. No obstante los de FEDEA consideran que la regresiva y antidemocrática reforma de 2012 va en la buena dirección. Para

esta gente Keynes, Solow, Piore, los economistas del trabajo franceses o Fina y Toharia entre nosotros, parecen no haber existido.

Resumiendo, la política económica y de mercado de trabajo aplicada por unos y otros ha sido y sigue siendo mucho más sensible a los problemas del capital que a los de los trabajadores, y está conduciendo a la economía española en su peculiar travesía hacia la sociedad postindustrial por un camino más próximo al anglosajón neoliberal que al socialdemócrata escandinavo [M. Koch, 2006]. Si en el caso del PP esto no deja de ser coherente –con sus convicciones ideológicas o con los intereses que defiende–, en el del PSOE no deja de ser sorprendente y solo puede entenderse como consecuencia de dos factores combinados (que cada cual los pondere a su gusto). Primero, el desconcierto en que se halla sumido el pensamiento socialdemócrata desde que la gestión keynesiana del capitalismo empezó a mostrar síntomas de agotamiento y el socialismo realmente existente se devoró a sí mismo. Segundo, los intereses espurios de muchos de sus economistas y dirigentes más influyentes. Al principio parecían social-liberales que buscaban fórmulas nuevas ante las limitaciones y contradicciones del repertorio tradicional de la izquierda; al final se han revelado como otra cosa, pues al dejar sus cargos públicos han acabado trabajando para grandes corporaciones privadas.

Si pudiéramos en un platillo de la balanza las interpretaciones del problema que contemplan a los parados como víctimas y en el otro las que, más allá de sus sofisticadas formulaciones, acaban señalándolos (junto a los sindicatos) como culpables, el resultado sería muy esclarecedor. En las publicaciones científicas es muy difícil encontrar referencias a la rigidez mental y poca profesionalidad de buena parte del empresariado español, que ante las dificultades solo sabe reventar salarios, recurrir al trabajo negro, reclamar reducciones de impuestos (a pesar de que paga menos que sus trabajadores) o refugiarse en el capitalismo especulativo en vez de echar el resto en el frente de la innovación. Más difícil aún es encontrar referencias a las cargas energéticas y financieras que soporta nuestro capitalismo productivo, mientras el sector eléctrico y compañía siguen disfrutando de privilegios casi monopolistas y la banca se dedica a lo suyo. Mientras tanto, desde la ortodoxia económica dominante se sigue transmitiendo un mensaje muy sencillo: para que la economía funcione y el paro acabe amortizándose es necesario que los que ganan más ganen todavía más y que los que ganan menos ganen todavía menos; que el capital (al contrario que las personas, extremadamente delicado) obtenga más rentabilidad, si no se irá a otra parte.

LA RESIGNACIÓN DE LOS PARADOS

A mi entender, la inercia de la estructura y la política económica y de mercado de trabajo desarrollada por los distintos Gobiernos no explican en su totalidad la gravedad del problema. En cierto sentido también los propios parados tienen

su cuota de responsabilidad, pues da la impresión de que han acabado resignándose de alguna manera a vivir con el paro. Resignación que también es fruto de la impotencia.

Los datos sobre la estructura del desempleo sugieren que quienes lo sufren son más un agregado estadístico que un grupo social (tal como lo define la sociología), por lo que tienen enormes dificultades objetivas para constituir un *nosotros* capaz de luchar colectivamente por el empleo, ya que están atravesados por numerosas líneas de fractura [E. Sanchis, 2007]. La nacionalidad divide a los parados en inmigrantes hiperflexibles y autóctonos más provistos de recursos para aguantar en el paro y que pueden ver a los otros como competidores ilegítimos. El paro femenino, como el empleo, está mucho más concentrado en ciertas ramas de los servicios que el masculino, que deriva en mayor medida de la industria y la construcción. Ellas han construido su identidad social en torno al trabajo y la familia, la de ellos se resiste a dejar de ser unidimensional. Por un lado tenemos a parados procedentes de la vieja clase obrera industrial en declive, por otro a parados de la nueva clase trabajadora postindustrial en ascenso. El entendimiento entre unos y otras no puede darse por descontado.

La edad contribuye igualmente a fracturar el colectivo, pues tampoco es fácil que quien está viviendo el paro al comienzo de su vida activa sienta que comparte suerte con quien ya ha cumplido los cincuenta. Los jóvenes tienden a refugiarse en el domicilio paterno antes que a movilizarse. Para los cincuentones el desempleo es más la puerta de salida definitiva de la vida laboral que una ocasión para la acción reivindicativa, sobre todo cuando se convierten en parados de larga duración y comienzan a vivirlo más como una condición que como una situación transitoria de la que se puede salir. Distintos niveles de estudios tienen que alimentar también expectativas diferentes de empleo que no invitan a la acción colectiva. Finalmente, la probabilidad de caer en pobreza o exclusión social no afecta a todos por igual.

Asimismo, ciertas políticas de empleo pueden haber reforzado la fragmentación al poner en primer plano lo que diferencia frente a lo que se pueda tener en común. Me refiero a las que tienen como objetivo estimular la contratación de tipos específicos de parados (jóvenes frente a adultos, mujeres frente a hombres, minusválidos, parados de larga duración, etcétera) y a las políticas de formación. Todas ellas pueden haber tenido el mismo efecto secundario: alimentar en muchos parados la sospecha de que son ellos mismos, como portadores de alguna carencia o característica particular, los responsables de su situación. En este sentido, la deriva que ha tomado la retórica de la empleabilidad me parece particularmente perversa. Hasta no hace mucho era la propia empresa la que se encargaba de acabar de perfilar la cualificación de los nuevos trabajadores, ahora cada cual debe apañárselas por su cuenta para mejorar su empleabilidad. Y si el problema tiene que resolverlo uno solo difícilmente encontrará motivos para hacerle frente organizándose junto a otros; al contrario, puede llevarle al repliegue

sobre sí mismo, a la depresión y en algunos casos al suicidio, como sugieren ciertas correlaciones estadísticas desde hace años en algunos países [P. Boix, 2012].

Lo que pretendo poner de relieve es que, frente al paro históricamente conflictivo estructurado en torno a un tipo social dominante (hombres adultos trabajadores manuales de la industria), en la actualidad nos encontramos con una diversidad de tipos ninguno de los cuales lidera claramente el conjunto, lo que restaría capacidad para la respuesta colectiva. Revertir esta situación no es fácil, porque detrás de aquellos parados había una clase *para sí*, mientras que detrás de estos lo que tenemos es una amalgama inconexa de colectivos (los trabajadores de la sociedad postindustrial) que a lo sumo constituirían una clase *en sí*, al parecer incapaces de concebirse como sujeto político. Hoy todos somos ora pobres en riesgo de exclusión ora «clases medias». Solo es una hipótesis de trabajo que, por otra parte, evidencia la necesidad de hacer una sociología de los parados en España.

Ahora bien, la base social de los movimientos de protesta suele ser heterogénea, los de clase son más la excepción que la regla [S. Tarrow, 1997]. Si a pesar de ello estallan es porque consiguen superar los obstáculos objetivos mediante la elaboración de una especie de ideología que les permite dotarse de una identidad colectiva. Esa ideología proporciona una explicación razonable del problema incompatible con su consideración como una fatalidad, identificando el adversario que lo ha provocado y proponiendo una estrategia para hacerle frente que pasa por la movilización. Esto es lo que les falta hoy a los parados. El paro fue conflictivo mientras constituyó el núcleo duro de la cuestión social. Por eso se convirtió en un problema político, es decir, uno susceptible de ser abordado mediante la acción colectiva contenciosa. En cambio, uno de los efectos inesperados de la gestión keynesiano-socialdemócrata del capitalismo ha sido la redefinición del paro como un problema económico (técnico) que debe ser abordado por expertos antes que por la vía de la confrontación [A. Keyssar, 1988].

Huelga decir que la ideología neoliberal, con sus fundaciones productoras de pensamiento y sus plataformas masmediáticas, lleva treinta años pregonando esta idea, que hoy refuerza el mensaje neoclásico y mucha gente ha acabado creyéndose. El éxito de este discurso entre los trabajadores –fundamentalmente en su apología de lo individual frente a lo colectivo, de la competencia hobbesiana frente a la solidaridad– ha jugado en contra de la aparición de una identidad colectiva entre los parados, y posiblemente ha propiciado que muchos de ellos no se sientan representados por los sindicatos, a los que acaban contemplando como algo ajeno.

LA IMPOTENCIA DEL SINDICALISMO DE CLASE

Obviamente las organizaciones de autodefensa de los trabajadores (los sindicatos) no se han dejado seducir por el catecismo neoliberal, pero tampoco han sabido oponerle una alternativa con la contundencia necesaria, en particular entre los parados. Ante todo porque tienen menos influencia y poder y porque su lugar natural de trabajo es la empresa, donde parados no hay. Pero quizás también porque se han hecho demasiado responsables.

Vaya por delante que entre 1985 y 2012 los sindicatos han convocado siete huelgas generales. Al menos en tres de ellas la lucha contra el desempleo ha estado muy presente. La del 14-D de 1988 fue contra el paro juvenil y la política económica y laboral del Gobierno socialista, que fracturó el mercado de trabajo exacerbando la contratación temporal. Las de 1992 y 2002 (Gobiernos del PSOE y del PP respectivamente) se oponían entre otras cosas a la reducción de la protección por desempleo. En 2012 se convocaron dos (hecho insólito) contra un mismo Gobierno del PP. La primera tenía como objetivo frenar una reforma ultraliberal del mercado de trabajo que reforzará el aumento del paro durante las fases recesivas del ciclo y el del empleo precario durante las expansivas. La segunda, entre otros, someter a referéndum la política antisocial que se está aplicando. Todo esto es sin duda cierto, pero estas líneas no están escritas para reconocer méritos y repartir premios de consolación, sino para estimular una reflexión que haga más efectivo el esfuerzo de los sindicatos en la lucha contra el paro.

Ahora todo el mundo asume con naturalidad que los empresarios no son hermanitas de la caridad y tienen derecho a luchar por lo suyo (los beneficios), de donde parece deducirse que son los sindicatos quienes tienen la obligación de desempeñar esa función. Ellos han de ser responsables. No pueden defender únicamente los intereses de los asalariados. También han de mirar por los parados, los autónomos, los pensionistas, la sostenibilidad del Estado de bienestar, la estabilidad de la democracia, la competitividad de la economía, la inflación, el déficit público, la deuda. Claro que sí. Pero hubo una época –cuando las relaciones de poder entre capital y trabajo estaban más equilibradas– en que era responsabilidad de las empresas el crecimiento económico, pagar impuestos y generar riqueza; de los sindicatos defender los intereses de quienes contribuían con su trabajo a crearla, y de los Gobiernos redistribuirla en aras de la cohesión social. Ahora se pretende cargar todo eso sobre las espaldas de los sindicatos, que además se dedican a otras cosas, como gestionar e impartir formación para el empleo. La necesidad de estar presentes en tantos frentes a la vez puede haber mermado su capacidad de lucha contra el paro.

Es posible asimismo que su implicación en las diferentes instituciones representativas de que forman parte no haya sido entendida por trabajadores acostumbrados a lo que ha dado en llamarse sindicalismo de proximidad, es decir el que se practica en la empresa. No obstante, conviene recordar que en una

sociedad democrática los intereses no se defienden solo en la calle o en el lugar de trabajo; también participando en aquellas instancias donde se toman decisiones relevantes. El sindicalismo de clase, además de organización de defensa de los trabajadores, se ha convertido en un sujeto sociopolítico que participa en la configuración de los derechos del conjunto de la ciudadanía, lo que le obliga a estar presente en las instituciones. Sin embargo ello entraña el riesgo de que al final no se acabe haciendo bien ni lo uno ni lo otro.

Tampoco puede descartarse que se hayan visto afectados por la tendencia a la burocratización y oligarquización presente en todas las organizaciones de masas [R. Michels, 1973]. Son dos problemas –el de la presencia en las instituciones y el de la burocratización– del que los mismos sindicatos son muy conscientes. A ellos se refieren sin duda dos dirigentes sindicales en una valiosa reflexión sobre la necesidad de «reivindicarnos y repensarnos» cuando escriben: «...hay otros problemas que son propios: la progresiva institucionalización que en ocasiones ha ido en detrimento del protagonismo de nuestros afiliados y afiliadas; un insuficiente ejercicio de la autonomía e independencia del sindicato que puede suponer que [...] se nos haya visto excesivamente próximos al poder [...]; la dinámica interna en la que nos hemos instalado, con mucha presencia en las sedes sindicales y menos en los centros de trabajo [...]; la debilitación, cuando no la pérdida, del espíritu y actividad militante; [...] la ausencia de controles en la actividad de nuestros permanentes sindicales...». Todo lo cual les lleva a acabar señalando la necesidad de «caminar hacia *una nueva ética militante*» [I. Fernández Toxo y F. Lezcano, 2011].

Añadamos a todo lo dicho la durísima campaña antisindical en que se halla embarcada la derecha política, económica, mediática y académica desde que Reagan y Thatcher dieron la señal de salida a comienzos de los años ochenta [J. Fontana, 2011; T. Judt, 2006] y que, en nuestro caso, cuenta con el refuerzo legitimante de ciertos discursos elaborados desde posiciones que se reclaman anticapitalistas y que sostienen lo que sigue.

A partir de 1982 CCOO y UGT, cada vez más «dependientes en muy buena medida de las ayudas públicas y poco menos que condenadas a acatar imposiciones sin cuento, [...] perdieron la condición de combate, bien que relativa, que habían exhibido en los estertores del franquismo y en los inicios de la transición». Las direcciones de ambos sindicatos se mostraron «mucho más interesadas en preservar los puestos de trabajo de un sin fin de *liberados* que en atender al objetivo de defender a los trabajadores». Con lo cual «los dos sindicatos mayoritarios son hoy puntales decisivos en la preservación del capitalismo que padecemos, y como tales configuran instancias vitales para aplacar cualquier suerte de resistencia entre los trabajadores», a los que ofrecen «la disposición de un abogado laboralista a cambio de renunciar a toda transformación objetiva del mundo» [C. Taibo, 2012].

Sindicatos como CIGA, LAB y ELA tampoco escapan a la crítica de Taibo, pues «no rompen los moldes de la socialdemocracia», su máxima aspiración es «el designio de imponer límites a la codicia del capitalismo sin barruntar ninguna perspectiva de dejar atrás este último». Algo más podemos esperar de organizaciones tipo CGT, CNT, SO, SOC y similares, ya que «en estas fuerzas sindicales al menos no hay que discutir lo más elemental [...] y se aprecia de siempre un esfuerzo encaminado a situar las luchas de cada día en un proyecto que implique una superación del capitalismo y de sus reglas». Ahora bien, tampoco depositemos en ellas demasiadas esperanzas: «Pena es que en este rincón, pequeño, del mundo que nos ocupa, las divisiones y la confrontación estén a la orden del día». Y «nada sería más equivocado que concluir, con todo, que organizaciones como las que ahora nos interesan no arrastran rémoras de lo que es la actividad común en el ámbito de los sindicatos mayoritarios. [...] Algo hay en el discurso sindical que impide una plena ruptura con respecto al sistema».

Este discurso contiene por lo menos dos puntos débiles. El primero es que reproduce y amplifica sin ninguna precaución la burda cantilena antisindical del «esperanzaguirrismo» más desinhibido acerca de la dependencia de los fondos públicos y el «escándalo» de los liberados. Al menos en el caso de CCOO esto es discutible: la primera fuente de financiación de este sindicato es, con diferencia, sus propios militantes. Antes de los recortes las subvenciones propiamente dichas a todos los sindicatos, repartidas de acuerdo con su representatividad, ascendían a poco menos de 16 millones de euros. La parte correspondiente a CCOO no podía por tanto alcanzar la mitad de esta cifra. Compárese con los algo menos de 10 euros de cuota mensual que pagan sus 1.200.000 afiliados y calcúlese lo que se ingresa por uno y otro concepto. Ciertamente los sindicatos acceden a otros fondos públicos para desarrollar actividades que, en sentido estricto, no les son propias. El caso más claro son los programas de formación para el empleo: durante el periodo 2010-11 CCOO recibió por este concepto 200 millones de euros [P. Beneyto, 2012]. Pero estos fondos se utilizan para pagar a docentes, no a sindicalistas. Confundir una cosa con la otra es tan poco riguroso como meter en la misma caja las subvenciones a Caritas y a la Iglesia católica.

Otras cosas que hacen los sindicatos para las que, como en el caso de la formación, reciben ayudas públicas *finalistas* (esto es, cuya percepción efectiva está asociada «necesariamente a la realización de las actividades correspondientes, perfectamente fiscalizadas y auditadas por las entidades convocantes, por lo que en ningún caso pueden considerarse como financiación directa» [P. Beneyto, 2012]) son, por ejemplo, asesorar en salud laboral y atender a inmigrantes. Como todo indica que las están haciendo bastante bien, ¿por qué no deberían seguir haciéndolas?, ¿porque nos salen demasiado caros? Según datos recogidos por el mismo Beneyto, lo que reciben los sindicatos en España por todos estos conceptos no desentona con lo que reciben en los países de nuestro entorno; y la insistencia en «lo que se llevan» olvida interesadamente los beneficios que

reportan en términos de «expansión de derechos, mejora de las condiciones socioeconómicas y laborales de los trabajadores, desarrollo de la sociedad civil y de las instituciones democráticas y cobertura del Estado de Bienestar».

Consideraciones similares pueden hacerse en cuanto al tema de los liberados. Según cifras dadas por buenas por la CEOE, antes de 2010 en el sector privado había poco más de 4.000 permanentes sindicales, y en el público algo menos de 10.000 a mediados de 2011. Tras la drástica reducción de efectivos derivada de la crisis y de la política antisindical del PP, en la actualidad el número total de liberados «se situaría aproximadamente en torno a los 8.000, lo que representa [...] menos de la tercera parte de los que correspondería de aplicarse la ratio europea en la materia y equivale, en el caso español, al 2,6% del total de representantes electos».

Sea como sea, esta cantilena se ha repetido tantas veces y en tantos foros que hasta los mismos afiliados están llegando a creérsela, así que los sindicatos ya están tardando en denunciarla sin complejos, al menos exhibiendo el detalle de sus ingresos y gastos cuantas veces sean necesarias.

El segundo punto débil se refiere a la oligarquización de las cúpulas dirigentes y, más en general, a la subordinación de la organización sindical al objetivo de garantizar su propia supervivencia sacrificando los intereses de los afiliados. Se trata de una aplicación a este ámbito de la conocida como ley de hierro de la oligarquía de Michels. A mi entender, aquí Taibo se deja llevar por la interpretación más popularizada de la obra de este autor.

Hace ahora un siglo Roberto Michels publicó un estudio sobre el SPD alemán (su propio partido), fundado en 1875, que ha pasado a la historia de la sociología política y de las organizaciones. Habiendo militado en su juventud, como marxista radical que era, en el ala izquierda de este partido, su experiencia política le llevó a convencerse de la inutilidad de la acción directa de las masas y de la necesidad de que esta acción fuese canalizada por organizaciones políticas institucionalizadas y burocratizadas (en el sentido weberiano del término). Según su tesis las masas están compuestas de individuos débiles que se hacen fuertes organizándose. El poder solo puede conseguirse y conservarse a través de la organización, pero toda organización está sometida a un proceso de oligarquización por el que sus dirigentes acaban traicionando los fines para los que fue creada y poniéndola al servicio de sus propios intereses. Todo lo cual le llevó a la conclusión de que no solo el socialismo sino también la democracia eran imposibles de conseguir. En consecuencia, acabó abrazando la fe de Mussolini.

La tesis de Michels, cuyo libro debería tener en su mesita de noche todo dirigente sindical, plantea una paradoja irresoluble: si mucha gente quiere defender sus intereses, alcanzar un objetivo político, necesita organizarse burocráticamente, pero esa organización acabará volviéndose contra ella. Es lo que explica el rechazo secular de los anarquistas y de los movimientos sociales de última generación a las jerarquías y a todo lo que no sea asamblearismo y democracia directa.

Un siglo después no cabe duda de que las fórmulas organizativas alternativas están sometidas a otra «ley» similar: la de la inoperancia; y también sabemos –gracias a trabajos como el de S. Lipset sobre el sindicato de tipógrafos– que la ley de hierro es en realidad una tendencia, poderosa pero que se puede contrarrestar. Si uno no quiere acabar donde Michels o en el cinismo más desencantado no tiene más remedio que plantearse (inspirándose en A. Hirschman) si, ante los primeros indicios de oligarquización en su organización, en vez de optar por la *salida*, puede valer la pena hacer un ejercicio de responsabilidad y quedarse alzando la *voz* crítica con *lealtad*. Porque el cambio social es también cambio en las instituciones, y por lo general estas se cambian desde dentro; y porque puede ser un error irreparable prescindir de organizaciones que han costado muchos años y sacrificios construir.

A esta crítica, que no debe ser desdeñada olímpicamente, los sindicatos podrían responder encargando una investigación independiente sobre la vida y milagros de sus liberados. Ello permitiría detectar la cuota correspondiente de profesionales del escaqueo que anida en toda gran organización –desde las religiosas hasta cualquier ONG pasando por corporaciones tan *eficientes* como Telefónica–, pero también sacar a la luz las ingratas condiciones bajo las que desarrollan su labor tantísimos activistas sindicales, siempre bajo sospecha y muchas veces incomprendidos hasta por sus mismos compañeros de trabajo, alineados cándidamente tras los representantes promovidos por el empleador.

El varapalo de Taibo no se limita ni mucho menos a los sindicatos. Aparte de arremeter (obviamente) contra todo lo que se mueve por la derecha, tampoco en el territorio de la izquierda deja prácticamente títtere con cabeza. Solo algo de lo que comienza a germinar en lugares como el 15-M puede ayudarnos a encontrar la vía de escape de los males que nos abruman. Por ahí puede venir la solución. A condición, eso sí, de que sus reivindicaciones no sean atendidas, porque el «mayor riesgo» a que se enfrenta este movimiento en proceso de consolidación («agudas divisiones internas» al margen), es que «se vea frenado por eventuales concesiones gubernamentales». En fin, que al parecer se trata de ir de derrota en derrota hasta la victoria final.

El problema de estos discursos hipercríticos es que son ante todo una invitación a la desmovilización, ya que solo permiten dos opciones. La más razonable es marcharse a casa a vivir la vida de la mejor manera posible renunciando a intervenir en la cosa pública. La otra, creérselos (pero hay que tener mucha fe) y comenzar a construir «espacios de autonomía en los cuales se proceda a aplicar reglas del juego diferentes de las hoy imperantes o, lo que es lo mismo, aspirar a crear las condiciones que permitan salir del capitalismo». ¡Qué bonito! Así que ante una situación que «impone, con urgencia, la búsqueda de caminos que nos inviten a salir del sistema hoy imperante», ya que «el capitalismo se ha adentrado en una etapa de corrosión terminal» y «puede desmoronarse encima de nosotros», lo único que se le ocurre a Taibo es invitarnos a trabajar en un «proyecto

que hoy por hoy tiene una condición más voluntarista que otra cosa», en el que «tiene que estar presente en todo momento un horizonte de medio y largo plazo que a menudo falta en las propuestas, casi siempre *cortoplacistas*, de la *izquierda política*», y que en el fondo consiste en ir poniendo en marcha un archipiélago de microcosmos libertarios en los que por fin sea posible amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Esto es lo que intentaron hace más de un siglo aquellos entrañables anarquistas que, no pudiendo cambiar el viejo mundo en que vivían, se fueron a crear otro nuevo en medio de la nada más allá del Atlántico, y ya sabemos cómo acabaron.

El referente utópico es necesario en todo proyecto de transformación social. Como ha demostrado la Historia, «los conceptos radicales utópicos de una fase pasan a ser las instituciones aceptadas y lugares comunes filosóficos de la siguiente» [B. Moore, 1973]. Estupendo tener en mente una sociedad autogestionada, igualitaria, despatriarcalizada, desmilitarizada, solidaria y desinsectada. El problema es cómo caminar hacia ella desde el punto en que nos encontramos, qué soluciones a corto plazo, qué objetivos inmediatos pueden proponerse a gente angustiada porque teme quedarse en el camino, muy lejos de la tierra prometida. Quien solo propone palabras sublimes puede acabar encontrándose solo en su larga marcha mientras la gente se vuelve a casa resignada o, lo que es peor, secunda a quien le propone soluciones milagrosas más tangibles, como el cierre de fronteras y la deportación de los inmigrantes.

A mi entender, hoy por hoy la única respuesta operativa a la crisis sistémica en que nos encontramos es la que ofrecen el sindicalismo de clase con todas sus limitaciones y el pensamiento socialdemócrata con sus partidos y contradicciones correspondientes. Un pensamiento que, por supuesto, no tiene la respuesta a todas las preguntas, sigue sumido en la perplejidad, sin esbozar una alternativa global a la irracionalidad profunda del capitalismo, sin saber qué hacer con la crisis ecológica, que debería tomarse en serio todas esas cuestiones que desde hace décadas plantean los utópicos postindustriales [B. Frankel, 1990] y han vuelto a plantear recientemente quienes abogan por el decrecimiento [S. Latouche, J. Sempere, R. y E. Skidelsky, el mismo Taibo]; porque no tiene sentido que, para que la economía funcione, unos se vean impelidos a satisfacer deseos enfermizos mientras otros no pueden cubrir las necesidades básicas y ni unos ni otros consiguen alcanzar la buena vida. Pero donde con toda seguridad no está la respuesta es en la nebulosa alternativa postcapitalista que imaginan algunas mentes preclaras.

Los sindicatos no lo están haciendo todo mal. Desde el giro de Zapatero en mayo de 2010 a su vuelta de Bruselas no han dejado de tirar del carro de la contestación, pero la gente no acaba de subirse a ese carro. Seguro que el miedo y la resignación explican buena parte de su reluctancia, pero también la distancia y recelo con que escuchan las proclamas sindicales. Así que no hay más remedio que perder grasa y recuperar músculo, redefinir prioridades, quizás retirarse de algunos frentes, abrir otros (¿por qué no, por ejemplo, una red de solidaridad

que contribuya a paliar los efectos más graves de la crisis?) y concentrarse en lo relevante. En esta sociedad postindustrial atomizada y masmediatizada donde ni siquiera las muchas cosas que hacen bien acaban de calar en la opinión pública, los sindicatos no lo tienen fácil. En este sentido parece obvio que en el frente de la visibilidad y la comunicación han perdido posiciones. Quien cree en la eficacia del discurso racional tiende a sentirse incómodo en el mundo de las técnicas publicitarias, pero en las circunstancias actuales hay que recordar con Gramsci que la lucha de clases también pasa por conseguir la hegemonía cultural, lo que hoy por hoy significa que la batalla de la imagen también hay que darla. Porque si lo que se viene diciendo es cierto (y uno se teme que lo es) no queda sino concluir que el paro tiene tradicionalmente la gravedad que tiene en España *también* porque los propios parados y las organizaciones de los trabajadores no han sabido reaccionar ante él convirtiéndolo en un problema político.

REPOLITIZAR EL PROBLEMA

La inercia estructural y la irresponsabilidad gubernamental se corrigen con la acción colectiva y el voto ciudadano. Un voto que no puede limitarse a protestar contra el Gobierno de turno sino que debería ser una apuesta a favor de aquel partido que ponga en el centro de su programa la lucha contra el paro. Si Suecia, a pesar de las dificultades actuales, goza tradicionalmente de los niveles de empleo más altos del mundo es también porque décadas de gobiernos socialdemócratas han acabado convirtiendo la política contra el paro en un rasgo estructural de su sociedad, como explicó G. Therborn hace años. Esto es lo que hace falta aquí: politizar el paro, volver a convertirlo en el primer problema de la agenda política.

El borrador de ese programa podría elaborarlo un movimiento de parados con un pie dentro y otro fuera de los sindicatos. Ello permitiría que unos se beneficiaran de la experiencia acumulada y las estructuras organizativas construidas durante dos siglos de movimiento obrero, y los otros del aire fresco revitalizador proveniente de nuevas formas de lucha. Al fin y al cabo, cada vez que la dinámica económica ha modificado sustancialmente la estructura del empleo, como es hoy el caso, el sindicalismo no ha tenido más remedio que adaptarse redefiniendo su táctica y su estrategia [E. J. Hobsbawm, 1979]. Ingredientes para confeccionar ese borrador sobran:

1. Lo primero que necesita España es más ingresos públicos. En 2010 representan aproximadamente el 33% del PIB frente a una media del 40% en la UE-15. Por el contrario, el gasto público representa el 45% del PIB frente al 50% de la UE-27. Para aumentar el ingreso hace falta una reforma fiscal en la línea que proponen algunos expertos, incluyendo funcionarios de Hacienda, así como acabar con el fraude, pues junto con Italia y Grecia

somos campeones de la OCDE en economía sumergida, que supone más del 20% de la riqueza nacional.

Según estimaciones en absoluto exageradas, la bolsa de dinero fiscalmente opaco tiene un tamaño cercano a los 250.000 millones de euros anuales, lo que significa que el Estado deja de ingresar cada año entre 75.000 y 90.000 millones. Aproximadamente la mitad de esta cifra es fraude, el resto deriva de las exenciones y desgravaciones de que gozan fundamentalmente las grandes empresas.

La reforma del sistema fiscal tiene que ir orientada a recuperar la progresividad perdida y aumentarla, que aquí nunca fue muy elevada. Los trabajadores pagan proporcionalmente más impuestos que quienes les contratan, las pequeñas empresas más que las grandes. Nuestra baja presión fiscal es consecuencia directa del trato de favor que reciben las rentas del capital. El IRPF tiene que dejar de ser un impuesto sobre los ingresos procedentes del trabajo y comenzar a serlo sobre todo tipo de ingresos. Porque aquí pagan impuestos sobre todo los trabajadores asalariados, primero como perceptores de rentas y después como consumidores. Más ingresos han de utilizarse también para aumentar la capacidad redistributiva del gasto público.

2. Vivimos en uno de los países más desiguales de la OCDE y en el más desigual de los veintisiete de la UE. El 10% más rico acumula en sus manos más de la mitad de la riqueza nacional, y su renta disponible anual decuplica la del 10% más pobre. Por ello tenemos uno de los índices más altos del mundo desarrollado de población por debajo del umbral de pobreza, que desde hace treinta años oscila en torno al 20% (frente al 16% de la UE-15 en 2010). Fenómeno exacerbado por la crisis que no solo afecta a menores, pensionistas o parados, ya que el 12% de la población ocupada española (40% de los trabajadores por cuenta propia, 7,1% de los asalariados) vive en hogares pobres [VV. AA., 2012]. La mayor desigualdad no solo pone en peligro la cohesión social, además crispa las relaciones laborales e impide el buen funcionamiento de la economía, como reconoce hasta el FMI. Más ingresos públicos y una orientación más redistributiva del gasto tienen que hacer posible eliminar este diferencial de desigualdad.
3. El gasto social en términos de PIB lleva años siete u ocho puntos por debajo de la media de la UE-15, como no se cansa de repetir V. Navarro. En 2010 representaba el 25% del PIB frente al 29% en la media de la UE-27. Por eso nuestro nivel de empleo público es tan bajo. La tímida ley de Ayuda a la Dependencia que consiguió sacar adelante en 2006 un Gobierno socialista es un paso en la buena dirección. Hay que acelerar su aplicación, no frenarla como ha hecho el Gobierno del PP decretando una moratoria. Pero hay que aplicarla más mediante la creación de empleo público que mediante la transferencia de rentas a las familias, que junto a la orientación actual del sistema fiscal incentiva a la mujer a quedarse en casa.

Apostar por el desarrollo de esta ley, junto con el de la educación infantil, puede generar (según estimación del mismo Navarro) unos tres millones de empleos tanto públicos como privados, directos como indirectos, durante los próximos años. Es la forma más contundente de combatir el paro, la única que nos permitirá llevar la tasa de empleo femenino desde el 40% hasta el 45%, que es la media de la UE-27.

4. En educación el primer problema a resolver es el del bajísimo nivel de inversión pública. Las instituciones internacionales recomiendan dedicar a ella el equivalente al 6% del PIB. Si bien es cierto que este nivel solo se alcanza con creces en Escandinavia, en España nunca ha habido manera de acercarlo al 5%; y el Gobierno del PP ya ha conseguido situarlo por debajo del 4%.

Esto y la incuria con que este país ha tratado históricamente a la educación explica en buena medida que nuestras tasas de fracaso y abandono escolar temprano no tengan parangón en ningún otro país de la OCDE. Reducirlas a la mitad en pocos años debe convertirse en cuestión de Estado. El esfuerzo ha de comenzar por la primera etapa de educación infantil, pues está demostrado que es una de las formas más eficaces de asentar el principio de igualdad de oportunidades y de mejorar los resultados escolares a lo largo de todo el proceso educativo. No se olvide, por otra parte, que la situación de nuestra educación es consecuencia directa de las desigualdades sociales que padecemos, ya que también está demostrado que las sociedades más desiguales tienen peores resultados educativos.

5. La orientación de la economía española hacia el nuevo modelo productivo reclamado por todo paisano tiene que ver con todas estas cosas y también con el aumento de la inversión en I+D+i hasta que suponga el 3% del PIB (1,3% en 2010 frente al 2% en la media de la UE-15). Es la única forma no abocada al fracaso de aumentar la competitividad de las empresas y la productividad de los trabajadores. La cuestión no es trabajar más (en 2010 en España se trabajaba una media de 1.663 horas al año, en Alemania 1.419), sino en mejores condiciones y con mejores instrumentos. Pero también en este dominio el Gobierno está haciendo lo contrario. Pretende mantener la competitividad precarizando el empleo y reduciendo los salarios. Incluso se ha atrevido a congelar el salario mínimo (medida insólita en nuestra democracia) sin considerar que solo en Portugal y Eslovaquia es más bajo que en España. Todo esto solo sirve para prolongar la agonía del viejo modelo.

No cabe duda de que ese programa debe contemplar otras medidas, desde la recuperación de la banca pública hasta la revisión de la ley del suelo de 1998, pero entiendo que no hace falta seguir porque la melodía es conocida. Al fin y al cabo todo esto no tiene nada de original; como diría un anticapitalista radical,

no se trata más que de «socialdemocracia consecuente». (De acuerdo: póngale usted unas gotas de utopía y quedará mucho mejor. A mí no me molesta.) No obstante, sí quiero acabar señalando que muchas de esas medidas solo tiene sentido plantearlas en el plano europeo (eliminación de los paraísos fiscales, *americanización* del Banco Central, tasa Tobin, armonización de la política fiscal), porque la respuesta a la globalización neoliberal es más y no menos Europa. Como afirma Judt, el modelo social europeo, a pesar de todas sus carencias, es hoy un referente positivo mundial, mejor valorado que el *american way of life* o el modelo chino. No desaprovechemos pues lo mucho que hemos conseguido. Por tanto hay que internacionalizar el movimiento. Inopinadamente, la visita que nos hizo a mediados de octubre de 2012 una delegación del Bundestag que quería conocer de primera mano la situación (bien aprovechada por la rama sensata del 15-M), puede contribuir a ello. En todo caso, ¿quién en mejor situación que los sindicatos de clase –con mucha humildad, sin sacar pecho– para vertebrarlo?

Medidas concretas aparte, a mi modo de ver ese movimiento europeo ha de tener en el centro de la diana dos objetivos generales. Primero, oponerse sistemáticamente al desprestigio de lo público. Segundo, frenar (cuando no revertir) ciertos procesos de privatización que, al menos en el caso de España, solo han servido para convertir los antiguos monopolios del Estado en oligopolios privados en manos de los amiguetes de quienes los desmantelaron y al servicio de sus propios intereses.

Se puede objetar que todo esto es necesario, pero que mientras tanto hay que dar una respuesta inmediata a lo urgente (ajustar el déficit, controlar la deuda). Cierto. Pero reconózcase también que ésta ha sido la gran excusa utilizada para relegar al séptimo cielo de la retórica política hueca lo que de verdad importa, y que tal proceder nos está llevando a la catástrofe.

En fin, con estos ingredientes un movimiento social podría elaborar una *Carta de los ciudadanos*, similar a aquella *Carta del pueblo* que hicieron los obreros ingleses hace más de siglo y medio, y pedir el voto para el partido que se comprometa a aplicarla. Esa carta hay que convertirla también en ideas fuerza que se opongan al mensaje dominante sobre la manera de resolver el problema del paro y que animen a la ciudadanía. Quiero pensar que el día en que un partido político no pueda llegar al Gobierno si subordina la resolución de este drama a otros objetivos «más importantes», sin comprometerse a atacarlo por vía directa, el día en que vuelva a encontrarse enfrente un sujeto histórico como lo fue el movimiento obrero, ese día comenzaremos a parar el paro.

REFERENCIAS

BENEYTO, Pere J. (2012): *Legitimidad, derechos sindicales y fuentes de financiación en España y en la Unión Europea*, Madrid, Fundación 1º de Mayo.

- BOIX, Pere (2012): «Toxicomanía y salud en tiempos de crisis», *Viento Sur*, núm. 120, pp. 99-108.
- ESTEFANÍA, Joaquín (2007): *La larga marcha. Medio siglo de política (económica). Entre la historia y la memoria*, Barcelona, Península.
- FERNÁNDEZ TOXO, Ignacio y Fernando LEZCANO (2011): «Reivindicarnos y repensarnos: sindicalismo, trabajo y democracia», *Gaceta sindical*, núm. 16, pp. 17-25.
- FONTANA, Josep (2011): *Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945*, Barcelona, Pasado y Presente.
- FINA, Lluís (2001): *Mercado de trabajo y políticas de empleo*, Madrid, Consejo Económico y Social.
- FRANKEL, Boris (1990): *Los utópicos postindustriales*, Valencia, IVEI.
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (2012): *Las reformas laborales en España y su repercusión en materia de contratación y empleo*, Madrid.
- GONZÁLEZ ROJAS, Francisco y Ricardo OYUELOS (1914): *Bolsas del trabajo y Seguro contra el paro forzoso*, Madrid, Instituto de Reformas Sociales e Instituto Nacional de Previsión.
- HIRSCHMAN, Albert O. (1977): *Salida, voz y lealtad*, México, Fondo de Cultura Económica.
- HOBBSBAWM, Eric J. (1979): *Trabajadores. Estudios de historia de la clase obrera*, Barcelona, Crítica.
- JUDT, Tony (2006): *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*, Madrid, Taurus.
- KEYSSAR, Alexander (1988): «El paro antes y después de la Gran Depresión», *Debats*, núm. 25, pp. 40-50.
- KOCH, Max (2006): *Roads to Post-Fordism: Labour Market and Social Structures in Europe*, Aldershot, Ashgate.
- LATOUCHE, Serge (2008): *La apuesta por el decrecimiento. ¿Cómo salir del imaginario dominante?*, Barcelona, Icaria.
- LIPSET, Seymour M., Martin TROW y James S. COLEMAN (1956): *Union Democracy: The Internal Politics of the International Typographical Union*, Nueva York, Free Press.
- MICHELS, Roberto (1973): *Los partidos políticos: un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*, Buenos Aires, Amorrortu.
- MOORE, Barrington (1973): *Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia*, Barcelona, Península.
- NAVARRO, Vicenç (2004): *El Estado de Bienestar en España*, Madrid, Tecnos.
- (dir.), (2009): *La situación social de España, III*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- SANCHIS, Enric (2007): «Desempleo y conflicto social: del malestar individual al silencio colectivo», *Sociedad y Utopía. Revista de ciencias sociales*, núm. 29, pp. 407-432.
- SANCHIS, Enric, Carles SIMÓ, y Juan CARBONELL ASÍNS (2012): «¿Hay tantos parados en España? A propósito de la fiabilidad de la Encuesta de Población Activa», comunicación presentada al *I Congreso Trabajo, Economía y Sociedad*, Fundación 1º de Mayo, Madrid, junio.
- SEMPERE, Joaquim (2009): *Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y crisis ecológica*, Barcelona, Crítica.
- SKIDELSKY, Robert y Edward SKIDELSKY (2012): *¿Cuánto es suficiente? Qué se necesita para una buena vida*, Barcelona, Crítica.
- SOLOW, Robert M. (1992): *El mercado de trabajo como institución social*, Madrid, Alianza.
- TAIBO, Carlos (2010): *Decrecimiento, crisis, capitalismo*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- (2012): *España, un gran país*, Madrid, Catarata.
- TARROW, Sidney (1997): *El poder en movimiento. Los movimientos, la acción colectiva y la política*, Madrid, Alianza.
- THERBORN, Göran (1989): *Por qué en algunos países hay más paro que en otros*, Valencia, IVEI.

- TOHARIA, Luis (2011): «El debate sobre las reformas necesarias para la economía española: el mercado de trabajo», *Gaceta sindical*, núm. 17, pp. 201-236.
- VV. AA. (2012): *Trabajadores pobres y empobrecimiento en España*, Madrid, Fundación 1º de Mayo.
- WILLIAMS, Karel y John WILLIAMS (comps.), (1990): *Antología de Beveridge*, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

.....
 ENRIC SANCHIS es profesor de Sociología en la Universitat de València. Su último libro publicado es *Trabajo y paro en la sociedad postindustrial*. Una versión previa de este artículo apareció en el *Anuario sociolaboral 2012* de la Fundación 1º de Mayo.